

Escuchar en medio del ruido.

Movilización social en Colombia durante el primer gobierno de Santos

Por **Mauricio Archila**
Ana María Restrepo
Martha Cecilia García

En medio de la algarabía de marchas, bloqueos, paros, disturbios, tomas hay palabras que cobran significado para colectivos, palabras que hacen parte de las consignas, los gritos y los motivos de las protestas. Palabras que se convierten en ejes de la movilización social y de las cuales aún se oyen los ecos. Palabras que requieren ser escuchadas y exigen la comprensión de su sentido social, como cimiento de un diálogo social que muchos actores sociales esperan que se produzca como parte de la ratificación de los acuerdos de La Habana.

(Encuentre cifras y tendencias de la movilización al final del artículo)

Introducción

El inusitado aumento de la protesta social en Colombia durante los cuatro años del primer mandato de Juan Manuel Santos (2010-2014)¹ ha llamado la atención de amigos y enemigos del gobierno. Unos para exaltar la pretendida apertura democrática de Santos y su supuesto talante progresista, los otros para enrostrarle su origen elitista y capitalino que lo alejan del sentir popular. En ambos casos se hace una lectura política, por no decir politiquera, de la protesta social que manipula, para uno u otro lado, lo que los actores sociales quieren expresar en sus demandas y repertorios de luchas. Porque si bien es cierto que la gente se queja de que el gobierno de Santos los ignora en sus reclamos o cuando les presta atención lo hace con la mano dura del Esmad, también hay que reconocer que algunas de sus políticas como la ley de víctimas y de restitución de tierras, y la apertura de

“

Dos claves gruesas de lectura de la dinámica de la protesta social durante el primer cuatrienio de Santos, claves que no son incompatibles: de una parte se señala la continuidad y, peor aún, la profundización del modelo neoliberal a través de las famosas locomotoras, especialmente la minero energética que no solo degrada la naturaleza sino que lleva a pueblos enteros a su desaparición cultural y física. De otra parte, como en su momento ocurrió con Belisario Betancur (1982-1986), los diálogos con la insurgencia y una tímida apertura democrática abren las compuertas del conflicto social históricamente alimentado por una creciente inequidad.

”

diálogos con las Farc, han permitido la visibilidad de sectores tradicionalmente excluidos.

De esta forma hay dos claves gruesas de lectura de la dinámica de la protesta social durante el primer cuatrienio de Santos, claves que no son incompatibles: de una parte se señala la continuidad y, peor aún, la profundización del modelo neoliberal a través de las famosas locomotoras, especialmente la minero energética que no solo degrada la naturaleza sino que lleva a pueblos enteros a su desaparición cultural y física. De otra parte, como en su momento ocurrió con Belisario Betancur (1982-1986), los diálogos con la insurgencia y una tímida apertura democrática abren las compuertas del conflicto social históricamente alimentado por una creciente inequidad. Unas y otras razones remiten a fisuras del sistema por las que hábilmente se cuele la gente. Pero allí no se agota la riqueza que encierra la movilización social entre 2010 y 2014.



La Base de Datos de Luchas Sociales de CINEP/PPP, registró 1.027 protestas, solamente durante el año 2013 en Colombia, el mayor número de luchas desde 1975. Archivo CINEP/PPP

Escuchar para entender

En medio de la algarabía de marchas, bloqueos, paros, disturbios, tomas hay palabras que cobran significado para colectivos, palabras que hacen parte de las consignas, los gritos y los motivos de las protestas. Palabras que se convierten en ejes de la movilización social y de las cuales aún se oyen los ecos. Palabras que requieren ser escuchadas y exigen la comprensión de su sentido social, como cimiento de un diálogo social que muchos actores sociales esperan que se produzca como parte de la ratificación de los acuerdos de La Habana. Algunas palabras que se han oído en estos cuatro años:

AGUA. Mucha gente pide a gritos agua. Que no tenga que acudir al burro, al carro tanque, al jagüey, sino que salga agua potable por las canillas. Otra pide a gritos que la salven del agua, que la corriente no se lleve sus pertenencias, que no se moje el colchón, que la humedad no se devore el mercado, que deje de llover a cántaros. Claro que hay gente que grita una cosa unos años y los siguientes grita lo contrario, como ocurre con los pobladores de varios municipios de la Costa Caribe que hoy tienen sed, y fueron los mismos que entre 2010 y 2011, se convirtieron de la noche a la mañana en damnificados por la ola invernal.

El agua como servicio público domiciliario es tema recurrente en las movilizaciones de pobladores urbanos y rurales, y de reclusos también. Pero en años recientes la movilización social también ha girado en torno a la idea del agua como bien común –y aquí común, significa, a los seres vivos (incluidos los humanos), a la naturaleza, al planeta–. El agua de ríos, quebradas, lagunas, humedales en riesgo de ser contaminada (o ya contaminada), de ser acabada (o ya desaparecida), siempre en riesgo de ser privatizada (o ya apropiada) o de ser “aprovechada” para generar energía (¿para quién?), mientras deja sin pesca, sin riego, sin oficio, sin tierras a pescadores y cultivadores tradicionales como ha ocurrido en estos cuatro años con la construcción de represas y de hidroeléctricas. El agua y sus fábricas han venido siendo defendidas por campesinos, pobladores urbanos, estudiantes, asalariados, trabajadores independientes y hasta gremios. Por todos aquellos que consideran que el agua es vida.

ALIANZA PÚBLICO-PRIVADA. Palabras que más tardaron en ser pronunciadas dentro de una propuesta gubernamental para reformar la educación pública universitaria, que en ser respondidas por el estudiantado con una oleada de movilizaciones y paros académicos, a lo largo de 2010 y a lo ancho del país. Desfinanciamiento y privatiza-

ción fue lo que entendió la comunidad universitaria, la colombiana y la chilena –que también permaneció en paro ese mismo año pidiendo educación gratuita y protestando contra reformas universitarias–. La lucha del estudiantado contra la introducción de las alianzas público-privadas en las universidades públicas fue vista con simpatía por otros grupos sociales, nacionales y hasta latinoamericanos, y recibió su solidaridad.

Otros sectores sociales también se han visto afectados por estas alianzas. Denominadas de otras maneras, hace rato se vienen presentando en el sector de los servicios públicos domiciliarios, donde las empresas municipales, departamentales y nacionales fueron liquidadas con el argumento de su ineficiencia e insostenibilidad. Así, “operadores”, de capitales foráneos, han venido copando el mercado de estos servicios que, en algunos casos, han tenido resultados próximos al fracaso, como lo evidencian las recurrentes protestas de pobladores de la Costa Caribe por energía demandada a Electricaribe y las recientes y casi diarias por agua en Santa Marta, cuya provisión está en manos de Metroagua. Dos ejemplos de empresas mixtas sustentadas en un discurso que aboga por más mercado y menos Estado, con una larga estela de movilizaciones.

CONSULTA (tal cual). Pobladores urbanos, campesinos, grupos étnicos,

estudiantes, vendedores informales, entre otros actores sociales, reclaman cada vez más ser consultados antes de que alguien se arrogue el derecho a tomar decisiones que a la postre resultan trascendentales para su vida individual y colectiva. Ser consultados respecto a proyectos minero-energéticos, a mega, meso o micro obras de infraestructura, a planes de recuperación del espacio público, de reasentamiento, de reubicación. Ser consultados sobre tal o cual funcionario que regiría el curso de instituciones educativas, o de cualquier colectivo. Durante estos cuatro años han sido numerosos los reclamos de sectores sociales que se sienten marginados de decisiones que les incumben, que se sienten tratados como meros objetos de proyectos y políticas, que comprueban que sus propuestas, temores, cuestionamientos no son tenidos en cuenta. Quienes tienen derecho (legítimamente constituido) a ser consultados reclamaron durante este cuatrienio mecanismos adecuados para ser informados y para adelantar procesos de debate interno para tomar decisiones colectivas y exigieron que éstas fueran respetadas por las autoridades competentes. Así mismo, indígenas y afrodescendientes reclamaron el cumplimiento de lo pactado en las consultas previas. Dado que estos procesos tienen un ritmo propio, funcio-

“ Durante estos cuatro años han sido numerosos los reclamos de sectores sociales que se sienten marginados de decisiones que les incumben, que se sienten tratados como meros objetos de proyectos y políticas ”

narios gubernamentales y privados han propuesto acabar con este mecanismo o regularlo de tal manera que se convierta en un procedimiento simple, fugaz y así se facilite la inmediata puesta en marcha de “los proyectos de desarrollo”.

HACINAMIENTO. Una palabra que pretende condensar la situación que viven miles de reclusos en distintas cárceles, grandes y chicas, de alta, mediana o baja seguridad, de reclusorios juveniles, y hasta de centros de detención inmediata. Un motivo de continuas protestas de internos y sus familiares. Pero ella encubre la violación de aquellos derechos que aún en situación de reclusión no pueden ser conculcados. En 2012, las protestas de colectivos de presos comunes y políticos de las cárceles del

país pretendieron, a través de la jornada nacional “Cárceles al desnudo”, dar a conocer la permanente violación de derechos de los reclusos en la mayoría de cárceles del país.

Pero el hacinamiento también ha sido motivo de protesta de estudiantes de educación básica, quienes junto a sus padres y maestros denuncian que la ampliación de la cobertura ha significado un aumento del número de estudiantes por aula, sin contar siquiera con suficientes maestros nombrados en propiedad, a quienes, además, se les incumple el pago oportuno de salarios, la promesa de nivelación salarial y de bonificaciones por trabajar en lugares de difícil acceso.

SEGURIDAD. Tras ocho años de perseguir aquella que se apellidaba “democrática”, aún resulta esquiva la seguridad a la que aspiran habitantes barriales, niños, mujeres, jóvenes, hinchas, comunidad LGBTI: poder caminar tranquilamente por las calles, saber que no serán atacados por defender sus diferencias, que no recibirán un baño de ácido por haber decidido de manera autónoma, que no serán apaleados o empaladas simplemente por ser, que no serán torturados, amenazados o asesinados en razón de sus orientaciones y preferencias. Muchos simplemente quieren esa seguridad que se apellida ciudadana.



Durante el primer periodo del gobierno Santos los motivos de las protestas giraron en torno a las políticas públicas, los servicios sociales, los derechos humanos integrales y el incumplimiento de pactos y leyes. Archivo CINEP/PPP

Y qué decir de la denominada *seguridad social*, aquella que no pagan muchas empresas privadas, la mayoría de CTA, las bolsas de empleo y que, en este cuatrienio, el Ministro de Trabajo ha fomentado entre trabajadores por cuenta propia. Incumplimiento y obligatoriedad, han sido motivo de protesta en estos cuatro años. Pero aun cuando se paga, cómo se provee? Este es otro asunto que ha lanzado a la protesta a asalariados que exigen mejores servicios relativos a la seguridad social.

TLC. Contra esta sigla (que se refiere a tres palabras) se han manifestado amplios sectores sociales, particularmente los campesinos asociados en las Dignidades Agrarias. Si bien, otros sectores de izquierda, habían hecho de los tratados de libre comercio una de sus banderas de oposición, ahora los directamente afectados han consolidado un proceso de movilización fuerte durante el último año, cabe destacar que a un año de iniciado el gobierno de Juan Manuel Santos, los paperos, cebolleros, arroceros, lecheros, cacaoteros, cafeteros, entre otros, no constituían el grupo más significativo de las luchas agrarias, desde hace un año son uno de los sectores con los que más ha tenido que sentarse a dialogar el ejecutivo nacional.

POLÍTICA INTEGRAL. De protestar contra las políticas estatales, los movimientos sociales del país han pasado a proponer alternativas de políticas integrales y necesarias para el mantenimiento de sus condiciones de vida. Lo han hecho los campesinos, que con sus protestas a lo largo y ancho del país han demostrado la necesidad de una política agraria integral y diferenciada²; pero también la población negra y afrocolombiana que ha tenido que recurrir a los paros cívicos para exigir vías, atención en salud, profesores para las escuelas, vivienda y servicios básicos como agua y energía, y demandar la atención integral de sus necesidades, lo que lamentablemente corrobora que en muchas regiones, los bajos niveles de calidad de vida están asociados a la condición étnica, tal como lo han denunciado una y otra vez los consejos comunitarios de Guapi y López de Micay sólo por mencionar algunos.

“

No todo tiene que ver con lo que se negocia en La Habana pero mucho puede caber en la idea de una paz integral, incluso la infraestructura y los servicios sociales.

”




La creciente movilización social da cuenta de una nueva ciudadanía. Archivo CINEP/PPP

TERRITORIO. Las movilizaciones indígenas más recordadas del gobierno de Santos son las Mingas Nacionales del 2013 y del 2012 y las acciones de resistencia civil de los Indígenas del Cauca con la que buscaron expulsar a todos los actores del conflicto armado de sus territorios. Estas acciones, recogieron algo que las comunidades étnicas de todo el país han venido exigiendo: la garantía de sus derechos culturales e interétnicos a través de la protección de sus territorios. Particularmente los indígenas y la población negra y afrocolombiana han tenido que enfrentarse a la expulsión por los megaproyectos, el extractivismo y hasta proyectos turísticos. Sin embargo actores sociales de todo al país han empezado a hacer uso de esta palabra que recoge la defensa de la vida conocida.

Estas son solo algunas de las palabras que han estado asociadas con la movilización social durante estos cuatro años. Son un abrebocas al trabajo de desmenuzar las consignas de las protestas sociales para abrirse a la comprensión de

los reclamos ciudadanos y a un diálogo necesario y urgente con distintos actores sociales

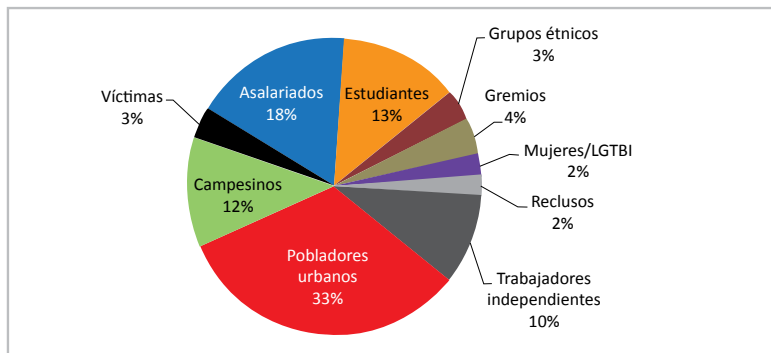
Conclusión

El panorama de las luchas sociales en el primer periodo presidencial de Santos no puede desconocer el aprovechamiento de los diálogos de paz con las Farc. En este marco, no todo tiene que ver con lo que se negocia en La Habana pero mucho puede caber en la idea de una paz integral, incluso la infraestructura y los servicios sociales. La creciente movilización social y la mayor visibilidad de algunos actores en esta coyuntura –que hemos resaltado en este artículo– dan cuenta de que muchas de estas demandas buscan el reconocimiento de sus protagonistas y la intención de participar decididamente en la definición de políticas públicas hasta alterar, a veces en forma sustancial, el modelo económico. Así se va construyendo una nueva ciudadanía que pide la igualdad pero con respeto a la diferencia. 

Cifras y tendencias de la movilización

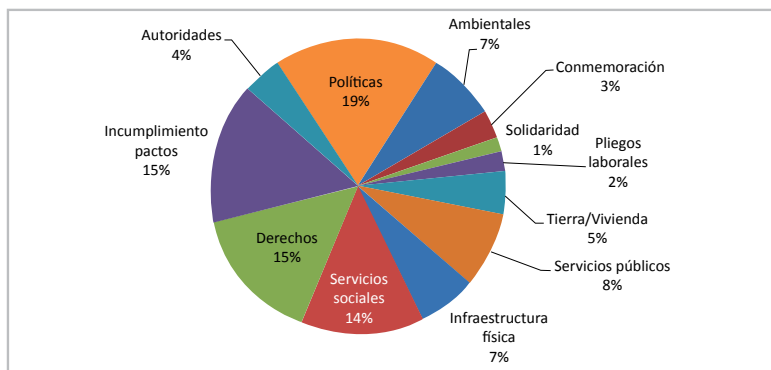
Los pobladores urbanos protagonizaron un tercio de las luchas sociales de este cuatrienio, el mayor número de acciones sociales colectivas corrió por su cuenta. Los asalariados realizaron el 18% de las protestas, mostrando así un repunte de la movilización social de maestros, trabajadores de la salud, empleados públicos y trabajadores de empresas del sector minero-energético y de sus empresas contratistas. Los estudiantes universitarios, del Sena y de educación básica aportaron el 13% de las luchas, los campesinos el 12% y los trabajadores informales el 10%. Los gremios, particularmente los transportadores y comerciantes, participaron de la protesta social con el 4% de las acciones. Las víctimas realizaron el 3% de las acciones sociales colectivas, porcentaje igual al aportado por los grupos étnicos. Las mujeres y la comunidad LGBTI, y los reclusos aparecen, cada uno, con el 2% del total de las protestas. Ahora bien, el número de protestas protagonizadas por cada uno de estos actores sociales no redundan en atención ya sea por parte de entes gubernamentales, privados o medios de comunicación.

Participación de actores sociales en las luchas sociales 7 de agosto de 2010-30 de junio de 2014



En cuanto a los motivos, las políticas gubernamentales fueron el principal blanco de las protestas sociales durante este cuatrienio, seguidas por la demanda de garantía y protección de los derechos integrales, y por la exigencia del incumplimiento de pactos de diversa índole, seguidos muy de cerca por las demandas referidas a los servicios sociales. Las reivindicaciones asociadas con medio ambiente, tierra y vivienda, servicios públicos e infraestructura física, componentes del hábitat, dan cuenta del mayor volumen de protestas sociales. Alarma la disminución ostensible de luchas asociadas con los pliegos laborales no dirimidos que da cuenta de la precarización del mundo del trabajo y de los efectos que sobre él ha tenido la creciente terciarización laboral.

Motivos de las luchas sociales 7 de agosto de 2010 - 30 de junio de 2014



“

Los pobladores urbanos protagonizaron un tercio de las luchas sociales de este cuatrienio, el mayor número de acciones sociales colectivas corrió por su cuenta

”



El 13% de las luchas sociales en el primer periodo de gobierno de Santos fueron aportadas por los estudiantes. Archivo CINEP/PPP

Referencias

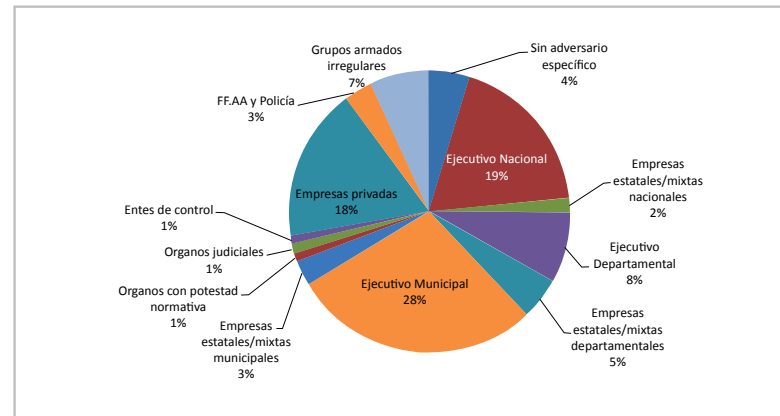
- Según la Base de Datos de Luchas Sociales de Cinep en 2011 hubo 907 protestas, en 2012 fueron 808, en 2013 se llegó al número más alto en nuestra serie histórica desde 1975 con 1029 luchas y hasta el 30 de junio de 2014, se han registrado 414. Para un análisis más detallado de la dinámica social del año pasado ver nuestro *Informe especial "Las luchas sociales en 2013"* (Bogotá, Cinep, 2014).
- Un desarrollo más detallado al respecto se presenta en el artículo sobre campesinado y gobierno de Juan Manuel Santos en esta misma edición de la revista.

Ana María Restrepo
Martha Cecilia García
Mauricio Archila

Investigadores CINEP/PPP. Equipo Movimientos Sociales

El 65% de las protestas sociales plantearon como adversario a los ejecutivos nacional, departamental o municipal junto con las empresas mixtas/estatales de los mismos niveles. El mismo porcentaje obtienen tres adversarios juntos: ejecutivo nacional, ejecutivo municipal y entes privados. Se observa en este cuatrienio una disminución sustancial de las protestas dirigidas contra los grupos armados irregulares, pero un aumento de aquellas enfocadas contra empresas privadas, de las cuales, un alto volumen corresponde a multinacionales.

Adversarios de las luchas sociales 7 de agosto de 2010 - 30 de junio 2014



Click
¡Afecta tu mundo!

www.clickafectatumundo.com

ABIERTAMENTE

Despolarizar las posiciones, desarmar las sin razones